



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA
M.P. Ramiro Aponte Pino

Neiva, veintiuno de abril de dos mil veinte.

Medio de control: CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD
Acto: DECRETO 024 DEL 16 DE MARZO DE 2020
Autoridad: MUNICIPIO DE EL PITAL (Huila)
Radicación: 41001-23-33-000-2020-00264-00

I.-EL ASUNTO.

De acuerdo con lo establecido en los artículos 136 y 185 del CPACA, se analiza si el *Decreto 024 del 16 de marzo de 2020* "Por medio del cual se adoptan medidas transitorias de policía, necesarias para prevenir la propagación, mitigar y disminuir el posible contagio de coronavirus covid- 19 en el municipio de El Pital"; es pasible del control inmediato de legalidad.

II.- ANTECEDENTES.

1.- Con fundamento en las atribuciones que le confiere el artículo 315 Superior, las Leyes 136 de 1994, 1551 de 2012, 715 de 2001, y 1801 de 2016, y en la Resolución 385 del 14 de marzo de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social¹; el 16 de marzo hogaño, el alcalde de El Pital expidió el Decreto 024, adoptando medidas transitorias para "...prevenir la propagación, mitigar y disminuir el posible contagio de coronavirus covid- 19".

Para conjurar la emergencia, ordenó el "...toque de queda en todo el territorio del municipio de El Pital Huila a partir del día 17 de marzo de 2020 y hasta los días 20 de abril de 2020, desde las 10:00 pm (de la noche) y hasta las 5:00 am (de la mañana) del día siguiente..." y el "...cierre de establecimientos públicos cuya actividad sea el expendio de bebidas embriagantes fuera o dentro del establecimiento tanto del área urbana como rural del municipio de El Pital...".

Así mismo, le ordenó a los establecimientos públicos implementar un plan de contingencia "...el cual tiene que estar disponible a más tardar el día 19 de marzo de 2020; la dirección local de salud, en compañía con el inspector de policía o quien haga sus veces, podrá solicitar a cualquier momento...".

¹ Por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus.

Finalmente, estableció la capacidad máxima de personas en los establecimientos públicos, restringió las reuniones públicas y privadas de más de 50 personas, y estableció una serie de medidas sanitarias de autocuidado (lavado de manos, evitar contactos directos entre otras).

2.- Dicho acto fue remitido a ésta Corporación excediendo las 48 horas¹ establecidas en el artículo 136 del CPACA, y a través de acta de reparto del 14 de abril de la presente anualidad se asignó al suscrito magistrado la sustanciación del asunto; el cual, fue recibido en el despacho el 20 de abril hogaño.

No obstante la extemporaneidad de la remisión, se debe analizar si es posible del control inmediato de legalidad; en caso afirmativo, abordar oficiosamente su conocimiento.

III.- CONSIDERACIONES.

1.-El marco normativo y jurisprudencial que regula el *control inmediato de legalidad*.

a.-El artículo 20 de la Ley 137 de 1994², preceptúa que "...las medidas de carácter general que sean dictadas en ejercicio de la función administrativa y como desarrollo de los decretos legislativos durante los Estados de Excepción, tendrán un control inmediato de legalidad, ejercido por la autoridad de lo contencioso administrativo en el lugar donde se expidan si se tratare de entidades territoriales o del Consejo de Estado si emanaren de autoridades nacionales." (subrayado fuera de texto).

b.- Ese precepto fue reproducido por el artículo 136 del CPACA, y el artículo 151-14, *ibídem*, dispone que los Tribunales Administrativos conocerán en única de instancia el "...control inmediato de legalidad de los actos de carácter general que sean proferidos en ejercicio de la función administrativa durante los estados de excepción y como desarrollo de los decretos legislativos que fueren dictados por autoridades territoriales departamentales y municipales, cuya competencia corresponderá al tribunal del lugar donde se expidan" (el subrayado es nuestro).

c.- En opinión del H. Consejo de Estado, el control inmediato de legalidad "...es el medio jurídico previsto en la Constitución Política para examinar los actos administrativos de carácter general que se expiden al amparo de los estados de excepción, esto es, actos administrativos que desarrollan o reglamentan un decreto legislativo.

El examen de legalidad se realiza mediante la confrontación del acto administrativo con las normas constitucionales que permiten la declaratoria de los estados de excepción (artículos 212 a 215 de la Constitución Política), la ley estatutaria de los estados de

¹ Término consagrado en el artículo 136 del CPACA.

² Por la cual se reglamentan los estados de excepción en Colombia.

excepción (Ley 137 de 1994) y los decretos expedidos por el Gobierno Nacional con ocasión de la declaratoria del estado de excepción¹” (subraya la Sala).

De igual manera, dicha Colegiatura estableció los presupuestos que se deben satisfacer para que las medidas de las entidades territoriales sean susceptibles de *control inmediato de legalidad*:

“a) que sean de carácter general; b) que correspondan al ejercicio de la función administrativa y c) que se dicten en desarrollo de los decretos legislativos expedidos durante los Estados de Excepción²”.

2.- El caso concreto.

a.- Como ya se indicara, por conducto del Decreto 024 del 16 de marzo de 2020, el Alcalde de El Pital adoptó las medidas transitorias anteriormente mencionadas; sin embargo, de acuerdo con la parte considerativa, esas determinaciones no se adoptaron en desarrollo de los Decretos Legislativos que expidió el Presidente de la República (Decretos Nacionales 417³ del 17 de marzo de 2020, 418⁴ y 420⁵ del mismo mes y año).

b.- Es pertinente resaltar, que el sustento legal que esgrimió el Burgomaestre, es el artículo 315 de la Carta Política, las Leyes 136 de 1994, 1551 de 2012 y 1801 de 2016. Disposiciones, que hacen parte de las facultades ordinarias de policía que le confiere la normatividad superior. En tal virtud, es menester colegir, que no se dictó en desarrollo de los decretos legislativos, y a pesar de que las *medidas transitorias* pretenden afrontar la crisis sanitaria que puede generar la propagación del *coronavirus – covid19*; se apoyaron en el ordenamiento ordinario y no en el estado de excepción.

c.- Tomando como marco de reflexión el anterior y calificado parecer jurisprudencial mencionado en literal c) del acápite anterior; considera la Sala que el Decreto remitido por el mandatario local no se expidió en desarrollo de los Decretos Legislativos emanados del Gobierno Nacional. Incluso, fue expedido el mismo día que se declarara el *estado de*

¹ Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Consejero Ponente: Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. Bogotá, 5 de marzo de 2012. Radicación 11001-03-15-000-2010-00369-00 (CA).

² Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Consejero Ponente: Reinaldo Chávarro Buriticá. Bogotá, D.C., Veintiocho (28) de Enero de Dos Mil Tres (2003). Radicación Número: 11001-03-15-000-2002-1280-01(CA-006). Posición reiterada, en providencia del 20 de octubre de 2009, proferida dentro del expediente radicado 2009-00549.

³ Por medio del cual el Gobierno Nacional declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica.

⁴ A través del cual se dictan medidas transitorias para expedir normas de orden público, y la concertación con las entidades departamentales y municipales.

⁵Por el cual se imparten instrucciones para expedir normas en materia de orden público en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia de COVID-19.

Asunto: Control Inmediato de Legalidad
Autoridad: Alcaldía de El Pital - Decreto 024 del 17 de marzo de 2020
Radicación: 41 001 23 33 000- 2020-00264-00

emergencia económica, social y ecológica (17 de marzo). Lo cual, hace que no sea posible el control de legalidad. En consecuencia, no se avocará el control sobre el mismo.

En mérito de lo expuesto, el suscrito Magistrado Sustanciador del Tribunal Administrativo del Huila,

DISPONE:

PRIMERO.- No asumir el control inmediato de legalidad del Decreto 024 del 16 de marzo de 2020, expedido por el Alcalde de El Pital (Huila).

SEGUNDO.- Por el medio más expedito, notificar esta decisión al Ministerio Público y publicarlo en la página web de la Corporación.

TERCERO.- Surtido lo anterior, archivar la actuación.

NOTIFÍQUESE.



RAMIRO APONTE PINO
Magistrado